Prefacio

Arreglar el fregadero y repintar la casa

Susan George

Este anuario no es sólo una compilación de textos, más allá de la importancia o excelencia del análisis. Es un llamado a la acción. Varios de sus capítulos prueban que la privatización no es inevitable y que aún podemos y debemos reaccionar para proteger y preservar y reclamar nuestra herencia de servicios públicos. Es evidente que sin servicios públicos extensivos y de acceso universal no habrá posibilidades de alcanzar los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

Es un honor que Daniel Chavez, investigador del TNI y editor de este primer *Anuario de los Servicios Públicos*, me haya invitado que escriba el prefacio. Estoy también honrada de figurar en las mismas páginas que tantos distinguidos especialistas en este campo. Pero antes de pasar al prefacio propiamente dicho tengo que hacer una confesión. Como señal de los tiempos neoliberales que corren, el lector constatará que el término 'privatización' aparece casi tantas veces como el término 'servicios públicos', y yo debo admitir que detesto la palabra 'privatización'. Siempre me ha sonado a patraña.

El proceso que se conoce como privatización consiste en convertir empresas de propiedad pública en acciones anónimas, con las que se puede negociar en el mercado de valores. Este tipo de actividad podría describirse con mayor exactitud con términos como 'alienación', 'expoliación', 'liquidación' o incluso 'timo'. ¿Cómo si no llamar a la acción de entregar a intereses privados el resultado del trabajo de cientos e incluso miles de personas que levantaron la empresa pública y se ganaron la confianza de los ciudadanos durante años o décadas? En no pocas ocasiones estas operaciones se han realizado infravalorando seriamente los bienes traspasados, y los virtuosos de la adquisición se han visto premiados con retribuciones tan espléndidas como injustificadas.

Lógicamente, es demasiado tarde para que los diversos autores que han contribuido a escribir este libro modifiquen la terminología empleada. Los neoliberales llegaron primero y pudieron imponer las palabras que les sonaban mejor, en lugar de las palabras sinceras que hubieran descrito a este tipo de operaciones de acuerdo a su verdadero significado, que no es otra cosa que una importante pérdida para la comunidad.

Por definición, un servicio público es propiedad de todos los ciudadanos que conviven en el mismo espacio territorial; un servicio encaminado a abastecer a todos ellos de ciertos servicios y beneficios imprescindibles. Dicho servicio, por lo tanto, forma parte del 'salario social' y contribuye al bienestar de todos. Una empresa privada, por el contrario, puede ser propiedad de cualquiera, independientemente de donde viva, a condición de que quiera y pueda permitirse adquirir acciones con la esperanza de que éstas le reporten futuros beneficios pecuniarios. A fin de garantizar dichos beneficios, los administradores de la empresa procurarán suministrar el servicio privatizado con el número mínimo de trabajadores y al precio (siempre mayor) que la clientela pueda soportar, por lo que sólo se lo proporcionarán a aquellos

que estén en disposición de pagarlo. Por lo tanto, no puede esperarse que se tenga en cuenta el auténtico valor del servicio para el conjunto de la comunidad.

Cuando Karl Polanyi publicó *La gran transformación*, en 1944, el ilustre sociólogo creía que se estaba gestando una época sin precedentes en la historia de la humanidad. En el mundo feliz de la posguerra cada cual contribuiría al bien común en la medida de sus posibilidades. El gobierno se encargaría de recaudar impuestos de personas y empresas y redistribuirlos, sobre todo mediante la provisión de servicios públicos. La redistribución garantizaría el bien de toda la comunidad. El sistema funcionaba y, donde quiera que se implantara, mejoraba la prosperidad.

En aquel momento, parecía existir un consenso sobre este modelo de gravamen, redistribución y servicios públicos. Sin embargo, al igual que Polanyi, las fuerzas progresistas no comprendieron que aquel 'consenso' representaba, de hecho, un momento histórico muy frágil, y que las fuerzas de reacción estaban aguardando el momento oportuno para consumar su venganza.

Los primeros en saltar a la palestra fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la ayuda de USAID (la agencia estadounidense de 'cooperación al desarrollo') y de una serie de fundaciones privadas norteamericanas. Cuando un país 'en desarrollo' se endeudaba hasta tal punto en que se veía obligado a solicitar un préstamo temporal al tándem formado por el Banco y el Fondo, sus servicios públicos tenían los días contados. La privatización –alienación– siempre ha sido uno de los principales requisitos exigidos por los programas de ajuste estructural de los gemelos terribles. Otro de sus mantras preferidos ha sido el de la 'recuperación de los costes', es decir, cobrar por la educación y la atención de la salud. A lo largo de los años ochenta y noventa el Banco publicó un listado anual de empresas privatizadas en los países víctimas de ajustes estructurales. El listado, impreso en una letra microscópica, ocupaba varias páginas y cada año se ampliaba a un ritmo de entre 1.300 y 1.400 empresas.

Margaret Thatcher fue la primera en aplicar las mismas tácticas en un país industrializado. En cuanto subió al poder, esta pionera de la privatización prometió ponérselo difícil a los sindicatos, y la mejor manera de hacerlo era vendiendo las empresas públicas en los que éstos ocupaban una posición dominante. Y mantuvo su palabra. Los servicios públicos se transfirieron en masa al sector privado, concediendo un mínimo de acciones a los empleados (en ningún caso por encima del uno por ciento) y un máximo de aportaciones del erario público para liquidar las deudas o mejorar las infraestructuras de las empresas antes de traspasarlas. Los nuevos accionistas, en su mayoría inversores institucionales, recibieron así un bonito regalo del gobierno pagado, lo quisieran o no, con los impuestos de los ciudadanos británicos. Los directores de las empresas –normalmente, los mismos de antes– se dedicaron a aprobarse aumentos salariales del 100 al 500 por ciento. Los sindicatos se vieron diezmados con la pérdida de dos millones de empleos sindicalizados.

Si bien la señora Thatcher nunca escondió sus convicciones neoliberales ni su objetivo de acabar con los sindicatos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se mostraron menos francos, asegurando que se estaban limitando a sanear las finanzas de Estados del Sur muy endeudados, mientras que en realidad se dedicaban a desmantelar el sector público. Este patrón se ha ido repitiendo en todos los países; últimamente en Europa del Este.

En estos momentos disponemos de una rica experiencia histórica. Sabemos que, en prácticamente todos los casos, tras la privatización la calidad de los servicios disminuye, los costes y las tarifas aumentan, el servicio deja de cubrir todo el territorio de un espacio nacional, los trabajadores pierden beneficios materiales y reciben peor trato. Nada de esto es casual, y se ha repetido una y otra vez. Los que pueden permitirse pagar por los servicios privados siguen disponiendo de éstos y son los únicos que cuentan.

Obviamente, los servicios públicos no siempre son intachables y perfectos ni se libran de casos de corrupción, pero como señala Mike Waghorne, un sindicalista de la Internacional de Servicios Públicos, *"si el fregadero pierde agua y la pintura se deteriora tu no quemas ni vendes la casa; arreglas el fregadero y vuelves a pintar"*. Sin embargo, la propaganda en la que llevamos viviendo dos décadas nos ha enseñado a vender la casa. Son demasiados los gobiernos que se han contentado con coger el dinero y salir corriendo.

Este anuario no es sólo una compilación de textos, más allá de la importancia o excelencia del análisis. Es un llamado a la acción. Varios de sus capítulos prueban que la privatización no es inevitable y que podemos reaccionar para proteger, preservar y reclamar nuestra herencia de servicios públicos. Esta perspectiva es vital no meramente para nuestras propias comunidades locales o

nacionales. Es evidente que sin servicios públicos extensivos y de acceso universal no habrá posibilidades de alcanzar los *Objetivos del Milenio* de Naciones Unidas, los cuales fueron aprobados por 189 países. Los gobiernos deben comprender que la privatización masiva es incompatible con tales objetivos y que, al estampar su firma, también han aprobado la extensión de servicios para los pobres –y para todos nosotros.

Le auguro larga vida al *Anuario de Servicios Públicos*, destinado a convertirse en un importante instrumento para la erradicación de la pobreza y la seguridad de una vida digna y decente para todos los habitantes del planeta que compartimos.